

C.A. de Temuco

Temuco, siete de agosto de dos mil veinticuatro.

VISTOS:

Comparece doña Elizabeth Carolina Muñoz Rubio, abogada, en representación de la denunciada en autos sobre práctica desleal, seguidos con el RIT S-3-2022 RUC 22- 4-0436609-6, del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, quien viene en deducir recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 21 de febrero de 2023, que acogió parcialmente la demanda deducida por la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, en contra de Empresa de Proveedores Integrales del Sur S.A., condenándose a la denunciada a pagar dos multas de 25 UTM cada una, con costas.

Funda su recurso de nulidad, invocando como causal principal, aquella establecida en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 459 N°4 del mismo cuerpo legal. Además, interpone como causal subsidiaria aquella contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo. De la misma forma, interpone como segunda causal subsidiaria aquella prescrita en el artículo 478 letra c), en relación al artículo 345 inciso 2 ambos del Código del Ramo.

Se procedió a la vista de la causa, interviniendo las partes, quienes alegaron lo pertinente a sus pretensiones.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el recurrente invoca como causal principal la contenida en el artículo 478 letra e) del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 459, en el caso concreto se infringe lo dispuesto en el N°4 de la norma citada, que prescribe que la sentencia definitiva deberá contener el análisis de toda la prueba rendida, los hechos que estime probados y el razonamiento de conduce a esta estimación. Lo anterior, por considerar la recurrente que el



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCMXPDVJQF

tribunal a quo no cumplió con lo dispuesto por el legislador en orden a establecer en su sentencia el análisis de toda la prueba rendida.

SEGUNDO: Expone la recurrente que, a lo largo de la sentencia recurrida, el tribunal a quo se limita a hacer una reproducción textual de la denuncia realizada por la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, como de la contestación de su representada, para luego hacer una reproducción de lo desarrollado en la audiencia de juicio llevada a cabo el 8 de febrero del año en curso, es decir, indica las pruebas que se rindieron, reproduciendo las deposiciones de los testigos y absolventes, en dicha sentencia. Sin embargo, el tribunal a quo, no realiza un análisis de dicha prueba. Específicamente, no indica las razones del por qué llega a sus conclusiones. Simplemente analiza la prueba rendida por la denunciante, más no la extensa prueba aportada por su mandante, solamente se limita analizar, y por ende, ponderar, la prueba de la denunciante, sin expresar el por qué desecha la prueba de su representada, como se puede apreciar en los considerandos vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercer, vigésimo quinto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo y vigésimo noveno, que transcribe.

TERCERO: Sostiene que el tribunal a quo resolvió que: “el reemplazo constatado por la fiscalizadora y denunciado en autos, no se encuentra desvirtuado por la prueba rendida por la denunciada (...). Realiza esta aseveración sin haber analizado la prueba de su representada y dado las razones del porqué no les da valor. Si bien su parte sabe que lo constatado por un fiscalizador, goza de presunción de legalidad, ello es justamente, una presunción legal, que admite prueba en contrario (no es una presunción de derecho), por lo que su representada tenía derecho a presentar sus pruebas, las que no fueron analizadas, y se limitó a señalar que éstas no desvirtúan lo señalado por la fiscalizadora. Es más, de la propia transcripción de las declaraciones de los testigos de su mandante que constan en la sentencia recurrida, así como de la prueba documental, en caso alguno su representada



aludió a que se realizaron adecuaciones necesarias, porque ello no era necesario, ya que no se estaban reemplazando trabajadores, más el tribunal funda por medio de razones jurídicas y doctrinarias toda su sentencia en describir qué se entiende por adecuaciones necesarias y que su representada no cumplió con ello y por eso la condena.. Agrega que, pese a que no se estaba reemplazando al señor Hugo Quezada y Marcelo Flores, la fiscalizadora Johana Aroca, respecto de la cual existe un reclamo formal y se cambió fiscalizador, luego se decidió dejar de realizar las funciones que, entre otros trabajadores, también realizan el señor Hugo Quezada y Marcelo Flores. En ese momento, la empresa optó por seguir operando con dificultades pese a que las funciones si las realizaban desde siempre otros trabajadores también, en pos de todos los trabajadores. Pero como el mismo sentenciador señala en su sentencia, no corresponde analizar las dos últimas fiscalizaciones, sino solamente las dos del 11 y 14 de noviembre, ambas realizadas por la señora Soto Aroca. En este orden de ideas, su prueba apuntaba a justificar una adecuación necesaria, toda vez que esto no se requería, ya que como tantas veces se ha dicho, tanto la función del señor Hugo Quezada como la del señor Marcelo Flores, eran desempeñadas por más trabajadores, y no solo en ausencias, sino siempre, de manera habitual, necesariamente a fin de mes, además de hacerlo de manera cotidiana. El resolver de esta manera (que no se dan los requisitos de las adecuaciones necesarias) evidencia que no valoró la prueba de su representada, es más ni siquiera la consideró. Lo anterior se aprecia de la simple lectura de la sentencia, como se señaló al inicio de su argumentación. Cita jurisprudencia. Así las cosas, el tribunal a quo no ha cumplido con la letra e) de lo establecido por la doctrina en relación a esta causal invocada.

CUARTO: Concluye que, el vicio denunciado ha influido sustancialmente en lo dispositivo de fallo ya que, si el tribunal a quo no hubiese quebrantado disposición contenida en el artículo 459 N°4, en el sentido de apreciar la prueba de su representada, se habría dado



cuenta que en caso alguno se estaba escudando en adecuaciones necesarias, y en definitiva, frente a la multiplicidad de las mismas, habría resuelto que los trabajadores Hugo Quezada y Marcelo Flores no fueron reemplazados, y en definitiva habría decidido que en estos autos no existió una práctica desleal por parte de su representada, en el sentido que no existieron reemplazos de trabajadores en huelga. Pide que, acogándose el recurso por la causal invocada, se declare que la sentencia es nula parcialmente, en la parte que condena a su representada por práctica desleal intentada por la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, condenándola al pago de dos multas de 25 UTM cada una y a ser publicada la sentencia por la Inspección del Trabajo en su registro respectivo y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, donde se declare, en definitiva, que su representada, Proveedores Integrales del Sur S.A. no ha incurrido en práctica desleal alguna, toda vez que no hubo reemplazo de los trabajadores en huelga, con costas.

QUINTO: Que, el recurrente invoca, la causal del 478 letra e) del Código del Trabajo, alega la nulidad fundado en que la sentencia definitiva no ha efectuado un análisis de toda la prueba rendida, infringiendo de esta forma el número 4 del artículo 459 del texto legal citado. Funda su petición en que, a su juicio, el tribunal solo analiza la prueba rendida por la denunciante, y que desecha la de su parte, sin fundamentación. Sostiene que lo anterior tiene influencia en lo dispositivo del fallo ya que, al valorar así la prueba, la sentenciadora razonó erradamente, dando lugar a la denuncia de la Dirección del Trabajo por el reemplazo ilegal de dos huelguistas.

SEXTO: Que, contrariamente a lo sostenido por la recurrente, esta Corte estima que la sentenciadora ha hecho un análisis fundado y completo de toda la prueba rendida en autos, como se evidencia a partir del considerando vigésimo primero, en donde la jueza, luego de analizar todos los antecedentes incorporados en el juicio, concluye que la fiscalizadora constató que don Pedro Paillán estaba ejecutando las



funciones de costeo – que realizaba habitualmente el huelguista Hugo Quezada- el 11 de noviembre y que pese a haberse allanado la empresa, las siguió haciendo ese día luego de terminada la primera visita fiscalizadora. Agregando que, no hay prueba aportada que desvirtúe suficientemente ese hecho, que a la luz del artículo 23 del DFL N° 2, Orgánico de la Dirección del Trabajo, tiene presunción de veracidad, incluso para fines judiciales. Por su parte, el considerando vigésimo segundo señala que, luego de dicho análisis, se encuentra acreditado con la prueba testimonial de la propia demandada e incluso con lo señalado por los testigos Flores y Quezada, que cuando ellos no estaba en la empresa, por temas de permisos, ausencias o vacaciones, o en periodos de mucha actividad como fines de mes, sus funciones eran realizadas por sus compañeros de sección o éstos les ayudaban temporalmente, entre ellos los mismos trabajadores supuestamente reemplazantes en la huelga, esto es, Paillán y Nova. Finalmente, en el motivo vigésimo séptimo, señala que una cosa es una ausencia por motivos de vacaciones, licencias prolongadas o permisos, que son propios de una relación laboral, a una ausencia por huelga. Concluye que la posibilidad de hacer estos cambios en huelga está prohibida y la única exclusión tiene que ver con las adecuaciones necesarias, en las que el empleador no puede asignar a trabajadores que no cumplen normalmente determinadas funciones, aquellas que realiza el trabajador en huelga y, en el caso que nos ocupa, si bien el Sr. Paillán y el Sr. Nova realizaban esas funciones, ello era solo para los efectos de suplirlo por ausencias determinadas o en casos específicos de mucho trabajo, ninguno de los cuales concurren en el caso de autos, en el que la huelga crea una prohibición general de remplazo.

SEPTIMO: Que así las cosas, no se advierte por esta Corte la concurrencia del vicio alegado, razón por la cual se desestimaré el recurso por la causal intentada.

OCTAVO: Que el recurrente, en subsidio, interpone la causal contenida en el artículo 478 letra b) del Código del Trabajo, esto es,



cuando la sentencia definitiva haya sido pronunciada con infracción manifiesta de las normas sobre la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica.

NOVENO: Señala que, sin perjuicio de que el Código del Trabajo establece como exigencia a los jueces del trabajo la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica y estipula como causal de nulidad la infracción a dichas normas, lo cierto es que no conceptualiza lo que debe entenderse por sana crítica. Así, la definición de ello, se lo debemos a la doctrina y a la jurisprudencia emanada de los tribunales superiores de justicia. Es así como, atendido, además, lo dispuesto en el artículo 456 del Código del Trabajo, podemos establecer que las reglas de la sana crítica se encuentran constituidas por las leyes de la lógica, las científicas, las técnicas y aquellas que deriven de la experiencia. La norma en comento ordena además que el juez “tomará en especial consideración la multiplicidad, gravedad, precisión, concordancia y conexión de las pruebas o antecedentes del proceso que utilice, de manera que el examen conduzca lógicamente a la conclusión que convence al sentenciador”. En este sentido, se ha sostenido que existen ciertos parámetros que regulan la sana crítica, que son las reglas de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

DÉCIMO: En relación a las máximas de la experiencia, considera que éstas se refieren a definiciones o juicios hipotéticos de contenido general, desligados de los hechos concretos que se juzgan en el proceso, procedentes de la experiencia, pero independientes de los casos particulares de cuya observación se han inducido y que, por encima de esos casos, pretenden tener validez para otros nuevos. Añade que se establecen como axiomas derivados de la experiencia que representan un saber que se estima cercano a la verdad, por lo que deben ser formuladas en abstracto. Sin embargo, para determinar la validez del contenido de la máxima de la experiencia en cuestión, se debe necesariamente tener en consideración las circunstancias del caso



concreto en la que debe aplicarse. El quid del juicio de autos era determinar si durante la huelga fueron reemplazados en sus trabajos los señores Hugo Quezada y Marcelo Flores. Ahora bien, como quedó determinado y no fue discutido en juicio, tanto don Hugo Quezada como Marcelo Flores eran auxiliares de bodega. En la práctica, el señor Hugo Quezada realizaba el costeo de mercaderías, que consistía en ingresar las facturas, de acuerdo a las órdenes de compra, y el señor Marcelo Flores, se dedicaba a la reposición de mercadería, principalmente en el área de devoluciones. En opinión del tribunal a quo, la labor de costeo de mercaderías (de todas las mercaderías comercializadas por la empresa), solamente sería realizada por una persona, por el señor Hugo Quezada. Por otro lado, la reposición de mercaderías en el área de devoluciones, solo sería realizada por una persona, esto es, el señor Marcelo Flores. Al considerar eso el tribunal a quo, determinó que al estar en huelga estos trabajadores, sus funciones fueron reemplazadas.

UNDÉCIMO: Afirma que se interpone esta causal, toda vez que es impensado que funciones tan relevantes, solamente sean ejercidas por una persona, ello no se condice con la realidad. Así las cosas, las máximas de la experiencia nos indican que en una empresa de más de 160 trabajadores, dedicada a la venta y distribución de productos, para que ésta funcione y tenga éxito, la función de ingresar facturas correspondiéndolas con las órdenes de compra, así como la de reubicar la mercadería devuelta para que vuelva a estar disponible para su venta, no pueden recaer en una sola persona. En dicho sentido fueron todas las pruebas, aportadas por su representada, no obstante, el sentenciador solamente consideró la prueba de la denunciante y pasó por alto a las máximas de la experiencia.

DUODÉCIMO: Considera que, el vicio denunciado ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que, si el tribunal a quo no hubiese pasado por alto las máximas de la experiencia, evidentemente habría estado conteste con las probanzas de su



representada y, en definitiva, no habría concluido que las funciones realizadas por los señores Hugo Quezada y Marcelo Flores, solamente eran realizadas por ellos de manera exclusiva. Así las cosas, no habría condenado a Prisur, por práctica desleal. Pide que, acogiendo su recurso por esta causal subsidiaria, se declare que la sentencia es nula parcialmente, en la parte que condena a su representada por práctica desleal intentada por la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, condenándola al pago de dos multas de 25 UTM cada una y a ser publicada la sentencia por la Inspección del Trabajo en su registro respectivo, y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, donde se declare, en definitiva, que su representada, Proveedores Integrales del Sur S.A. no ha incurrido en práctica desleal alguna, toda vez que no hubo reemplazo de los trabajadores en huelga, con costas.

DÉCIMO TERCERO: Que, para resolver esta causal subsidiaria invocada, debe considerarse que el recurso de nulidad no constituye una instancia, de manera que estos sentenciadores no pueden ni deben revisar los hechos que conforman el conflicto jurídico de que se trata, siendo la apreciación y establecimiento de éstos una facultad exclusiva y excluyente del juez que conoció del respectivo juicio oral, y, asimismo, a esta Corte le está vedado de efectuar una valoración de la prueba rendida ante el Juzgado del Trabajo, lo que corresponde únicamente a éste y el cual está dotado de plena libertad para ello, con la sola limitación de no contrariar los principios de la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, siendo el cumplimiento de este límite lo que corresponde controlar, a través del llamado control de logicidad, cuando se invoca la correspondiente causal de nulidad.

DÉCIMO CUARTO: Que, asimismo, hay que tener presente que, si en una sentencia existe infracción a las reglas de la sana crítica, ésta debe ser manifiesta y, ello sólo concurre cuando los hechos que sustentan la sentencia recurrida aparecen desprovistos de todo fundamento, en relación a la prueba rendida o están claramente



controvertidos por ella, lo que en el caso en concreto no ha ocurrido, por lo que no se puede imputar al fallo la infracción denunciada.

DÉCIMO QUINTO: Que, además, resulta pertinente destacar que el recurso de nulidad es uno de impugnación y no de mérito, de lo que se sigue que importa una revisión de la validez del fallo dictado y, en particular, y por la causal aquí esgrimida, significa un control sobre la aplicación de los conocimientos jurídicos, técnicos, científicos o de experiencia y las reglas de la lógica, al tiempo de valorar la prueba. De ahí que no resulte aceptable que la impugnación se construya, como ocurre en este caso, a partir de la interpretación y valoración que la recurrente hace de la prueba rendida, pues con ello evidencia el propósito que se revisen directamente por esta Corte, tanto las pruebas incorporadas, como su mérito, que es cosa distinta al real supuesto de la causal esgrimida que se relaciona el razonamiento probatorio vertido en el fallo.

De lo expuesto es posible concluir que lo pretendido por la recurrente es que esta Corte valore nuevamente la prueba, pretensión que no cabe en un sistema recursivo como el laboral, en que no se contempla la apelación como forma de impugnar las sentencias definitivas, motivos por lo que esta causal subsidiaria deberá ser también rechazada.

DÉCIMO SEXTO: Como segunda causal subsidiaria de nulidad interpone la contenida en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, cuando sea necesaria la alteración de la calificación jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior, ya que considera la recurrente que el tribunal a quo hace una incorrecta aplicación de la norma jurídica, específicamente, la consagrada en el artículo 345 inciso 2 del Código del Trabajo, donde se prohíbe el reemplazo de trabajadores en huelga.

DÉCIMO SEPTIMO: Respecto a la causal invocada, expone que la doctrina la ha analizado en los siguientes términos: “(...) la función judicial de interpretar consiste en una serie de valoraciones, de



normas, de conductas, de intereses, etcétera. Dentro de esas valoraciones, el juez debe efectuar una apreciación legal de los hechos y de las cosas y de las consecuencias legales que ellos contienen, lo que corresponde a su calificación jurídica, en otros términos, dice, una vez establecido el hecho, el juez debe establecer también su calidad jurídica y, efectuada esa calificación, determinar sus efectos.” De acuerdo a lo expuesto, se puede concluir que una vez que el juez establece o asienta el hecho, debe proceder a calificarlo jurídicamente para determinar sus efectos. Por lo tanto, si esa calificación es errada, da lugar a la interposición de un recurso de nulidad fundado en la causal tratada en este título. A mayor abundamiento, para que la causal de nulidad invocada en este acápite sea procedente, se requiere que no se pretenda modificar los hechos a los que ha arribado el juez, sino que se establezca que los hechos a los que ha arribado el sentenciador hayan sido calificados erróneamente. Cita jurisprudencia.

DÉCIMO OCTAVO: Sostiene que, en el caso de autos, y tal como se aprecia de los considerados de la sentencia recurrida y transcritos en su libelo, el tribunal a quo estableció como hechos de la causa que: “En síntesis, en determinadas ocasiones de ausencia o mucho trabajo, los compañeros de sección reemplazan o ayudan a cumplir las funciones de don Hugo y don Marcelo, entre ellos aquellos que fueron indicados por la fiscalizadora como reemplazo, Pedro Paillán y Germán Nova, que aunque en el día a día ejercen una función diferente, las de don Hugo y Marcelo no le son ajenas y sus contratos de trabajo contienen cláusulas similares”. Estableciendo que tanto las funciones de don Hugo Quezada como las de Marcelo Flores eran realizadas también por otros trabajadores, dentro de los que se encontraban Pedro Paillán y Germán Nova y que sus contratos contienen cláusulas similares, resuelve que hubo reemplazo ilegal de trabajadores. Ante dichos hechos asentados, se hace una incorrecta aplicación de la norma jurídica, específicamente la consagrada en el artículo 345 inciso segundo del Código del Trabajo, donde se prohíbe



el reemplazo de trabajadores en huelga. El tribunal hace una incorrecta calificación jurídica (reemplazo en huelga) en relación a los hechos que tiene por acreditados, y que se señalaron anteriormente. Así las cosas, el hecho que los contratos de trabajo contengan cláusulas similares y que otros trabajadores también realicen las funciones de los huelguistas, si estos lo continúan haciendo durante la huelga, ello no implica un reemplazo. En síntesis, el tribunal a quo yerra en calificar jurídicamente como reemplazo a la situación de hecho que da por acreditada.

DÉCIMO NOVENO: Por lo anterior, considera que el vicio ha influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo, esto porque, si el tribunal a quo no hubiese errado en la calificación jurídica efectuada, evidentemente habría resuelto que el hecho de que el señor Paillán y Nova realizaran las funciones que fueron constatadas en la fiscalización, no constituía un reemplazo de los señores Quezada y Flores. Lo anterior, toda vez que el tribunal establece como hechos que dichas personas también realizaban las funciones y las conocían, de los dirigentes sindicales. Al haber hecho una correcta calificación jurídica, no habría condenado a su representada por práctica antisindical. Pide que acogiendo el recurso por esta segunda causal subsidiaria, se declare que la sentencia es nula parcialmente, en la parte que condena a su representada por práctica desleal intentada por la Inspección Provincial del Trabajo de Temuco, condenándola al pago de dos multas de 25 UTM cada una y a ser publicada la sentencia por la Inspección del Trabajo en su registro respectivo, y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo, donde se declare, en definitiva, que su representada, Proveedores Integrales del Sur S.A. no ha incurrido en práctica desleal alguna, toda vez que no hubo reemplazo de los trabajadores en huelga, con costas.

VIGÉSIMO: Que la calificación jurídica de un hecho es subsumir un hecho individual que se da por establecido dentro de una categoría prevista en una norma jurídica. En esta lógica, la causal de



nulidad del art. 478 letra c) del Código del Trabajo, por la que se solicita la alteración de la calificación jurídica de los hechos, parte del supuesto de que los hechos son inamovibles, y que solo existe discrepancia en cuanto a los efectos y consecuencias jurídicas que a dichos hechos asigna el tribunal.

VIGÉSIMO PRIMERO: Que, como se dijo, el sentenciador en los considerandos veintiuno, veintidós y veintisiete, señala límites al derecho fundamental de la huelga, al señalar que la posibilidad de hacer los reemplazos en huelga está prohibida y la única exclusión tiene que ver con las adecuaciones necesarias, en las que el empleador no puede asignar a trabajadores que no cumplen normalmente determinadas funciones, aquellas que realiza el trabajador en huelga y, en este caso, si bien el Sr. Paillán y el Sr. Nova realizaban esas funciones, ello era solo para los efectos de suplirlos por ausencias determinadas o en casos específicos de mucho trabajo, hipótesis que no concurren en el caso de autos, en el que la huelga crea una verdadera prohibición general de remplazo.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Que, en este contexto no se aprecia que exista una errónea calificación jurídica de los hechos que se dan por establecidos, ya que lo cuestionado es la forma de razonamiento del tribunal para acoger la denuncia de la Dirección del Trabajo por práctica antisindical, cuestión que no corresponde a la causal subsidiaria intentada.

VIGÉSIMO TERCERO: Que, no apreciándose la existencia de una errónea calificación jurídica de los hechos establecidos, será desestimada la causal de nulidad subsidiaria alegada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 474, 478 y 482 del Código del Trabajo, **SE RECHAZA**, con costas, el recurso de nulidad interpuesto por la abogada ELIZABETH CAROLINA MUÑOZ RUBIO por la denunciada, en contra de la sentencia definitiva de fecha 21 de febrero de 2023, dictada en los antecedentes RIT S-3-2022 RUC 22- 4-0436609-6, del Juzgado de



Letras del Trabajo de Temuco, sentencia que, en consecuencia, **NO ES NULA.**

Se regulan las costas en la suma de trescientos mil pesos.

Redacción del abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda.

Regístrese.

NºLaboral - Cobranza-103-2023. (csd)



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCMXPDVJQF

Pronunciado por la Tercera Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco, integrada por el Ministro Sr. Alberto Amiot Rodríguez y abogado integrante Sr. Fernando Cartes Sepúlveda. Se deja constancia que no firma el Ministro Sr. Carlos Gutiérrez Zavala, no obstante concurrir a la vista y acuerdo de la presente causa, por encontrarse en comisión de servicios.

En Temuco, a siete de agosto de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: XCMXPDVJQF